



Comisión Nacional de los
Derechos Humanos
MEXICO

EXAMEN PERIÓDICO UNIVERSAL

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

MÉXICO

INTRODUCCIÓN

1. El presente documento constituye la contribución de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) al Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, atendiendo a su Resolución 5/1, en donde se establece la participación activa de las instituciones nacionales de derechos humanos en el Examen Periódico Universal.

2. Si bien es cierto que la responsabilidad de someterse a dicho examen es del Gobierno mexicano que deberá dar cuenta al referido Consejo sobre el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos con base en información objetiva, fidedigna y verificable, también es cierto que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos funge como un mecanismo cooperativo que le permitirá al grupo de trabajo, integrado por los 47 Estados miembros del Consejo de Derechos Humanos, ampliar la información y su visión sobre el estado que guardan los derechos fundamentales en México.

SEGURIDAD PÚBLICA

3. El asunto de la seguridad pública requiere ser abordado de manera integral sin dejar de atender a la raíz misma de la problemática que le es concomitante. No basta con implementar acciones de contención y represión del crimen, sin atender y afrontar las causas generadoras, condicionantes y determinantes de la delincuencia. Desde esta perspectiva, es fundamental enfrentar varios factores: la corrupción en los cuerpos de seguridad pública; la inequidad en la redistribución del ingreso socialmente generado; la marginación y exclusión de grupos sociales y, la cada vez más evidente desintegración de los núcleos familiares.

4. Es lamentable que las estrategias gubernamentales planteadas en los programas oficiales creados en los últimos 10 años, como los denominados: "Cruzada Nacional Contra el Crimen y la Delincuencia" (1998), "El Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006" (2002), "Las 10 Acciones Contra la Delincuencia Organizada, Comprometidas por el Ejecutivo Federal" (2004) y "Plataforma México" (2007- 2008), no hayan alcanzado los resultados esperados debido a la falta de continuidad en los planes y programas oficiales, la improvisación en el servicio público, la corrupción y la impunidad.

5. La ciudadanía expresó contundentemente un "ya basta" el 21 de agosto de 2008. Ese día la población exigió acciones concretas en contra de la criminalidad. En una reunión, que congregó a los titulares de los tres Poderes de la Unión, los secretarios de estado, los gobernadores y presidentes municipales de diversas entidades, así como a organizaciones representativas de la sociedad civil; empresariales; sindicales, de asociaciones religiosas y de los medios de comunicación, se suscribió el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.

6. En seguimiento a este compromiso nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 28 comisiones estatales y procuradurías de derechos humanos determinaron establecer un sistema ordenado de evaluación de las 75 acciones previstas en el Acuerdo Nacional sobre Seguridad, Justicia y Legalidad. Entre otras medidas se trata de contar con indicadores sobre el cumplimiento de órdenes de aprehensión y las pendientes de ejecución dictadas por jueces penales, pues el incumplimiento de tales órdenes manifiesta la impunidad que constituye un lastre para la procuración de justicia en la mayoría de las entidades de nuestro país y, consecuentemente, favorece la reiterada comisión de los delitos que se pretenden abatir.

7. En los últimos años las instituciones de seguridad pública han contado con mayores recursos para cumplir su labor. Sin embargo, la seguridad pública ha transitado por situaciones cada vez más difíciles, puesto que, al no combatirse los delitos en forma adecuada, los índices delictivos se han incrementado de manera exponencial. Un aspecto positivo, es la reciente reforma al sistema de justicia penal (18 de junio de 2008), en la

que la participación de la ciudadanía cumplirá un papel fundamental para el diseño, control y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. Aspecto que fue diseñado para servir como un importante mecanismo para la rendición de cuentas de las autoridades.

8. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que la reforma a las leyes como fórmula para abatir la delincuencia, sólo es útil cuando se acompaña de campañas de prevención del delito, así como de la profesionalización y formación del personal que labora en las diversas instancias de procuración y administración de justicia.

9. Es menester promover y alentar la cultura de la denuncia de los delitos y las acciones de las instituciones de justicia orientadas a garantizar a las víctimas y testigos condiciones mínimas de seguridad y trato digno. Ello en razón de que, en numerosas ocasiones, la revelación de datos personales, la pérdida de tiempo y de recursos económicos, así como los riesgos de sufrir amenazas por parte de los delincuentes, orillan a las víctimas y testigos a evadir o eludir el proceso penal, que les garantizaría obtener la justicia que anhelan. Dicha actitud facilita la liberación de los delincuentes y su consecuente impunidad.

10. Teniendo presente lo anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos concluye, con gran preocupación, que los programas oficiales para garantizar la seguridad pública de todos los habitantes de la República Mexicana no han alcanzado los objetivos de coordinar las acciones en los tres ámbitos de gobierno, como lo establece el artículo 21 constitucional; tampoco se ha logrado consolidar la función del Ministerio Público como garante de la constitucionalidad y legalidad, ni elevar el nivel de eficiencia de la institución, reducir los índices de impunidad, disminuir los delitos del orden común y federal, abatir los hechos de corrupción, brindar una mejor atención a las víctimas del delito y respetar los derechos humanos, lo cual implica un atentado al derecho a la seguridad pública de todos los habitantes de la República Mexicana.

DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS

11. En 1993 fueron elevados a rango constitucional los derechos de las víctimas del delito, mismos que fueron ampliados a raíz de la reforma del año 2000 al artículo 20, apartado B, de la Constitución Política Mexicana. Lamentablemente, los derechos de quienes sufren la agresión de los delincuentes, no están debidamente desarrollados en la legislación secundaria, lo cual impide alcanzar su plena eficacia.

12. Es indispensable promover la homologación de los derechos que tienen las víctimas de delitos en todas las legislaciones locales e impulsar la creación de una red de colaboración institucional con la participación de las autoridades y la sociedad civil, para garantizar los derechos de las víctimas en las áreas de seguridad pública, procuración e impartición de justicia, salud, educación y desarrollo social.

13. Es preciso establecer una institución autónoma del Ministerio Público, con igual rango e importancia que las defensorías de oficio, para ofrecer asesoría gratuita y profesional, y así garantizar la protección de los derechos humanos de los ofendidos y víctimas del delito, así como establecer un fondo público para resarcir el daño e indemnizar a las víctimas.

ABUSO DE AUTORIDAD

14. La práctica de las detenciones arbitrarias sigue siendo recurrente en nuestro país y representa una grave violación al derecho fundamental de la libertad personal. Por ello, se requieren mecanismos de supervisión a fin de que, en los casos de personas detenidas en forma arbitraria, se dé vista sobre dicha situación a los órganos de control interno competentes y, cuando así lo amerite, se inicie la averiguación previa correspondiente en contra de los responsables de este abuso de poder.

15. Es necesario establecer un régimen de responsabilidades administrativas, civiles y penales para los servidores públicos que violen el derecho a la presunción de inocencia. Es preciso, asimismo, garantizar el derecho a la reparación del daño para todos aquellos casos en los que se realicen actos de privación de la libertad de las personas, sin demostrar su responsabilidad.

16. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está consciente de que el delito de desaparición forzada está estrechamente ligado al fenómeno de detenciones arbitrarias. Al respecto, se puede afirmar que

esta práctica aún tiene lugar en nuestro país y representa una grave violación a los derechos humanos de las personas.

17. El abuso de la autoridad policiaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y en Atenco, Estado de México, dejó al descubierto una preocupante realidad de los cuerpos de seguridad. A los agravios físicos y psicológicos contra la población se sumó uno más, meses después, cuando la autoridad federal, concretamente la Secretaría de Seguridad Pública, rechazó las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos, abriendo un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento.

RETENES

18. La función primordial del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México es preservar y defender la soberanía nacional. Sin embargo, las leyes prevén la participación militar en las tareas de seguridad pública, siempre y cuando medie una solicitud expresa y sea en auxilio de las autoridades civiles. Nunca de manera unilateral e independiente.

19. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera indispensable mantener y reforzar la lucha contra el crimen organizado, pues se trata de una batalla en la que, de perderse, las víctimas seríamos todos los mexicanos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está a favor de que impere el orden público y celebra todo esfuerzo e iniciativa en contra de la delincuencia, cuando ésta se combate dentro del derecho y con respeto a las normas y reglamentos de operación en vigor de las propias corporaciones de seguridad pública.

20. Se han recibido numerosas quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la existencia de retenes que se instalan por distintas instituciones policiales e incluso elementos del Ejército Nacional. Estas medidas no tienen pleno sustento en la Constitución, incluso provocan en ocasiones, lamentables agresiones y asesinatos de personas inocentes.

AGRAVIO A PERIODISTAS

21. En México, en los años recientes, se ha incrementado el número de agresiones en contra de periodistas, que han quedado impunes. De 2005 a 2008, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha radicado expedientes relacionados con la muerte de 24 periodistas o trabajadores de los medios de comunicación, asesinados, presumiblemente, por razón de su labor profesional. En el mismo periodo se ha documentado la desaparición de 8 periodistas.

22. Ante esta situación, se explica que algunos editores hayan decidido autocensurarse y dejar de realizar o difundir periodismo de investigación en áreas tales como el narcotráfico, los secuestros y el crimen organizado con objeto de evitar cualquier riesgo, ya que consideran que las instituciones del Estado difícilmente pueden garantizar su seguridad, y en dado caso castigar a los culpables, lo que también incide negativamente en la libertad de expresión y en el derecho a la información.

RECLUSORIOS

23. Debido a la problemática que enfrenta el sistema penitenciario en nuestro país, entre los objetivos de la reciente reforma del sistema mexicano de seguridad pública, se encuentra el de implementar prácticas más eficientes para el funcionamiento de las cárceles.

24. Las deficiencias y carencias que existen en el sistema penitenciario mexicano han motivado diversos pronunciamientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ha propuesto aumentar los recursos presupuestarios y de personal para atender necesidades en materia de trabajo, salud y actividades deportivas de los internos, así como mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros de reclusión y fomentar la profesionalización del personal que labora en los centros de reclusión a través de un Servicio Civil Penitenciario.

25. Es preciso unificar la legislación penitenciaria con la finalidad de establecer uniformidad en las disposiciones y los criterios en materia de tratamiento, sustitutivos de penas de prisión y beneficios de libertad anticipada.

LIBERTAD ANTICIPADA

26. La importancia de la libertad anticipada radica en que su escasa aplicación, contribuye a la sobrepoblación penitenciaria y afecta el correcto funcionamiento de los centros de reclusión. Además, ocasiona violaciones a los derechos de petición, de readaptación social y de seguridad jurídica. Es necesario, establecer criterios y objetivos uniformes, tanto en la legislación federal como en las locales, para el otorgamiento de los beneficios de libertad anticipada a quienes así lo merezcan y no representen una amenaza para la sociedad.

TORTURA Y MALOS TRATOS

27. En México la tortura y los malos tratos se encuentran expresamente prohibidos en la Constitución. Sin embargo, en la actualidad, aún existen actos de tortura y malos tratos que atentan contra la integridad física o psicológica de las personas. El Estado tiene la obligación de tomar las medidas efectivas para erradicar la tortura y garantizar que los servidores públicos que incurran en esta práctica, sean investigados, procesados y se les apliquen las penas previstas en la ley.

28. Es indispensable homologar el tipo penal de tortura en todos los códigos penales de los estados de la Federación, para identificar sus diversas modalidades, así como los elementos objetivos para su acreditación.

MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA

29. El 11 de julio de 2007, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aceptó la invitación del Estado Mexicano para fungir como el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), de conformidad con lo establecido en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, ratificado por México el 11 de abril de 2005 y que entró en vigor el 22 de junio de 2006.

30. En el mes de septiembre de 2007, el Mecanismo Nacional inició las visitas correspondientes y en julio de 2008, había realizado ya 268 visitas a lugares de detención, entre los cuales se encuentran: centros de reclusión para adultos y adolescentes; cárceles municipales; agencias del Ministerio Público; estaciones migratorias; albergues; casas de asistencia y hospitales psiquiátricos, ubicados en cuatro entidades del país: Campeche, Distrito Federal, Querétaro y Tabasco, emitiendo sobre el particular seis informes.

31. El trabajo realizado por el Mecanismo Nacional tiene como finalidad identificar situaciones que puedan derivar en actos de tortura o tratos crueles inhumanos o degradantes, las cuales se hacen del conocimiento de las autoridades competentes, y con ello se previene la incidencia de estos abusos.

EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN

32. En México se ha avanzado en la construcción de un marco jurídico contra la discriminación. Se cuenta ya con una Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y con un conjunto de leyes federales que garantizan los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, tales como: adultos mayores, niños y personas con discapacidad. El gran reto ahora es implementar debidamente los estándares contenidos en dicha legislación y eliminar los contextos de discriminación en los que se encuentra un número importante de mexicanos.

VIOLENCIA DE GÉNERO

33. En nuestro país, por rezagos culturales y factores de descomposición del tejido social, la violencia de género ha alcanzado graves proporciones. Este es el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez, en la frontera norte, donde se ha hecho evidente el fracaso de las políticas gubernamentales para combatir este fenómeno.

34. Los hechos de violencia contra la mujer se reproducen cada día con mayor intensidad en diversas partes de la República Mexicana; por ello, resulta conveniente consolidar las políticas públicas que, por una parte, prevengan la violencia en contra de la mujer y, por la otra, propicien la investigación efectiva de estos delitos y el castigo correspondiente a los culpables.

IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES

35. En México se han instrumentando diversas series de acciones y mecanismos a cargo de varias instituciones públicas, con la finalidad de garantizar la plena igualdad entre mujeres y hombres. Es aún una asignatura pendiente su consolidación. No obstante, actualmente tanto las instituciones públicas encargadas

del tema, como la labor de la sociedad civil organizada, propician mecanismos que permiten un avance significativo. En este sentido, en el año 2006, se expidió la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres donde se le asigna a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la tarea de seguimiento, evaluación y supervisión de la Política Nacional en esta materia, lo que dio origen a la creación del Programa de Igualdad entre Mujeres y Hombres, a cargo de esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

36. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha asumido como cuestión prioritaria impulsar acciones de sensibilización, para promover el respeto a los derechos fundamentales de las mujeres en nuestra sociedad, así como fomentar una cultura que reconozca la igualdad en la relación recíproca de las mujeres y los hombres.

ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y A LOS ADULTOS MAYORES

37. Es también prioritario para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promover el respeto y la protección de los derechos de las personas que por su condición y circunstancias se encuentran en situación de vulnerabilidad, especialmente, los niños, niñas y adolescentes, ya que difícilmente pueden protegerse de actos o ataques que atenten contra su desarrollo integral, su dignidad personal y su integridad física, psíquica y social.

38. Es necesario que el Congreso Federal agilice las acciones necesarias para permitir el pleno establecimiento de un sistema integral de justicia para adolescentes, de conformidad con el artículo 18 constitucional, reformado en el 2005, y con los tratados internacionales de los que México es parte.

39. En el caso de los adultos mayores, es indispensable que reciban un trato respetuoso y digno para evitar que sean víctimas de explotación y maltrato físico o mental, así como que sean mejoradas las condiciones administrativas y legales para que puedan hacer efectivos sus derechos.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

40. La protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad ha tenido una presencia cada vez mayor en la comunidad internacional durante los últimos años a raíz de la adopción de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

41. Es indispensable llevar a cabo la armonización del ordenamiento jurídico nacional con la Convención antes citada, haciendo una revisión exhaustiva de la legislación que se relaciona con las personas con discapacidad y desde luego considerar el retiro de la Declaración Interpretativa formulada a la Convención por el gobierno mexicano. Asimismo, es necesario establecer un Mecanismo de Monitoreo de los derechos previstos en la Convención, de acuerdo con el artículo 33 de dicho instrumento internacional.

DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS

42. A pesar de las acciones legislativas implementadas a partir de la reforma constitucional del año 2001, para hacer efectivos los derechos de las comunidades indígenas, y, no obstante la positiva labor de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, aún existen rezagos históricamente acumulados que colocan a dichas comunidades en franca desventaja y vulnerabilidad frente al resto de la población. Revertir estas condiciones es un imperativo nacional.

43. En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, se reconoce que los pueblos indígenas aún no disfrutan de una situación social y económica propicia para mejorar su desarrollo. Siguen careciendo de empleos, con salarios extremadamente bajos, además de relaciones desiguales con los demás núcleos de población, aunado a la desigualdad ante la administración de justicia y a graves problemas de desnutrición, alta mortalidad y falta de servicios, rezago educativo, inequidad de género, altos índices de migración y actos de discriminación.

44. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que es necesario reformar y actualizar los instrumentos legales y administrativos para atender los conflictos agrarios que impiden a muchas comunidades indígenas disfrutar de sus derechos a la tenencia de la tierra, a la seguridad jurídica, al desarrollo, a la justicia y a la paz. Es una tarea inacabada sin la cual no podrán sentarse las bases para el desarrollo de la población indígena.

45. Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, son especialmente preocupantes las condiciones que enfrentan los indígenas cuando entran en contacto con las instituciones de procuración de justicia. En la mayoría de los juicios o procedimientos en que se encuentran involucradas personas o comunidades indígenas, es poco probable que se tomen en cuenta sus costumbres y particularidades culturales. En casos excepcionales son asistidos por intérpretes y defensores con conocimientos de sus lenguas.

46. El Informe Especial sobre el caso de la profesora Eufrosina Cruz Mendoza, emitido en marzo de este año por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, da cuenta de la discriminación por cuestión de género de la que fue objeto en el municipio de Santa María Quiérolani, del Estado de Oaxaca, cuyas autoridades invocaron los usos y costumbres para impedirle participar en las elecciones municipales, por ser mujer.

47. Está aún pendiente la promoción de las reformas a las constituciones de las entidades federativas para que sean reconocidos los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a la letra y espíritu de la reforma constitucional de agosto del 2001 y la reciente Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

MIGRANTES

48. En México los migrantes indocumentados, en su mayoría centroamericanos, padecen una amplia gama de abusos, agresiones y violaciones a sus derechos humanos, tanto por parte de agentes del Estado como de la delincuencia común y organizada.

49. A partir de 2007, a los asaltos, agresiones y extorsiones se ha sumado, de manera creciente, el secuestro de migrantes, a cuyos familiares, sobre todo a los radicados en Estados Unidos de América, se exigen cantidades de cientos o miles de dólares para su liberación. La impunidad que prevalece también ha dado origen a la conformación de grupos delictivos que asaltan a los migrantes y violan a las mujeres y niñas en caminos de extravío o en lugares cercanos a las vías ferroviarias. Lo más grave de esta práctica delictiva es que, en algunos casos estos grupos cuentan con la complicidad de elementos de cuerpos policíacos.

50. Se hace necesario legislar para que las actividades de los jornaleros agrícolas tanto nacionales como extranjeros sean debidamente garantizadas en cuanto a sus derechos laborales y de seguridad social, con especial atención en el desarrollo de niñas y los niños que se encuentran con sus familias en los campos agrícolas.

51. Por otra parte, entre los avances, destacan las reformas a la Ley General de Población que despenalizan la migración indocumentada y la suspensión de la habilitación de cárceles como estaciones migratorias; también el otorgamiento de facilidades para la regularización de personas víctimas de delitos, y el mejoramiento de las condiciones de aseguramiento.

TRATA DE PERSONAS

52. La trata de personas se ha incrementado en México, sin mediar una actuación consistente de la autoridad responsable. Es urgente, contener la expansión de la trata de personas e impedir que otras más sean privadas de su libertad y sometidas a esta forma moderna de esclavitud, que además deja serias secuelas, muchas veces irreversibles, en la integridad física y psicológica de las víctimas.

53. Si bien la entrada en vigor de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas representa un avance, existen vacíos legales por la diversidad de los términos en que se ha legislado localmente en la materia, tanto en la tipificación del delito, o falta de ésta, como en las sanciones y agravantes.

DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD

54. El incremento poblacional en México demanda cada día más servicios de atención sanitaria que, actualmente, son notoriamente insuficientes. Ciertos padecimientos, enfermedades y pandemias como el VIH/SIDA requieren de tratamientos cada vez más complejos y costosos.

55. Se deben instrumentar las medidas adecuadas en las instituciones públicas de salud, para garantizar el abasto oportuno y suficiente de medicamentos, material de curación e insumos para la operación del equipo médico, a través de procedimientos ágiles y efectivos, que garanticen la prestación de dicho servicio y permita a

los pacientes que el ejercicio del derecho a la protección de la salud no sea obstaculizado por cuestiones burocráticas o presupuestarios, como frecuentemente sucede en el sistema de salud mexicano.

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

56. México, como Estado parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ha presentado cuatro informes ante el Comité DESC, donde se ha destacado la preocupación de dicho Comité, sobre la situación económica de México, ya que aproximadamente el 40% de la población económicamente activa, según las informaciones disponibles, trabaja en el sector informal, con bajos salarios y por tanto desprovistos en su mayoría de prestaciones de seguridad social.

57. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también comparte la preocupación expresada por el Comité por la falta de educadores en las escuelas de enseñanza primaria y secundaria en muchas zonas apartadas y pobladas por indígenas, en donde se presenta el índice más elevado de analfabetismo y un alto porcentaje de niñas y niños menores de 16 años que trabajan, sobre todo en el sector agropecuario.

58. En este sentido, la pobreza constituye una negación a los derechos humanos y puede ser definida como una condición caracterizada por la sostenida y crónica privación de recursos, capacidades y opciones para el disfrute de un nivel de vida digno.

59. En relación con el medio ambiente, es importante mencionar que los habitantes de México deben gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer a las generaciones futuras. Las autoridades deberán procurar este derecho, que implica la utilización racional de los recursos naturales, la preservación del patrimonio natural y la diversidad biológica, apoyados en la información y educación ambientales.

60. Finalmente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que el examen al que se someterán los 192 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas, redundará en el mejoramiento de la situación de los derechos humanos de la comunidad internacional y en nuestro país alentará el cumplimiento de las obligaciones y los compromisos del Estado mexicano en esta materia y en la evaluación de los avances y los retos a los que se enfrentan las instituciones para alcanzar la plena realización y ejercicio de los derechos humanos de todos los habitantes de la República Mexicana.